

Santiago, dos de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

En estos autos RIT S-149-2017, RUC 1740076403-4, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de nueve de julio de dos mil diecinueve, se acogió la excepción de caducidad opuesta a la denuncia de prácticas antisindicales.

La parte demandante dedujo recurso de nulidad en contra de la referida decisión; y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por decisión de diecisiete de enero de dos mil veinte, lo rechazó.

Respecto de este último pronunciamiento la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando se lo acoja y se dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada de la o de las que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la materia de derecho respecto de la cual el recurrente solicita se unifique la jurisprudencia, consiste en determinar los requisitos que debe reunir el reclamo administrativo para suspender el plazo de caducidad de la acción de denuncia de la práctica antisindical, conforme los artículos 486 y 168 del Código del Trabajo, y la fecha en que debe entenderse presentada la acción que interrumpe el plazo cuando el tribunal a quo ordena corregir el procedimiento.

Reprocha que no se haya aplicado la doctrina sostenida en las decisiones que apareja para efectos de su cotejo, dictadas por esta Corte en los autos rol 434-2010, 7.980-2014, 5.780-2015, 9.363-2019 y 24.177-2019.

La primera corresponde a un caso en que se acogió una excepción de caducidad por entender que si bien se interpuso un reclamo administrativo, éste fue declarado abandonado, por lo que no tuvo la virtud de suspender el plazo



respectivo; se declaró que la correcta interpretación del inciso final del artículo 168 del Código del Trabajo, es la que determina que la única conducta que la ley exige para producir el efecto pretendido es la interposición del reclamo, siendo irrelevante cómo concluya.

Mediante la segunda también se invalidó la decisión de base y se estimó que la demanda se dedujo dentro del término legal, tras considerar que la interposición de la demanda ante un tribunal incompetente en razón del territorio es una actuación útil a efectos de la suspensión del plazo.

En la tercera se interpretó que la suspensión del plazo prevista en el artículo 168 inciso final del Código del Trabajo, es aplicable respecto de la acción de autodespido o despido indirecto del artículo 171 del mismo cuerpo legal.

La cuarta corresponde a una denuncia de tutela laboral con ocasión del despido, en que se concluyó que la gestión administrativa efectuada por la trabajadora a propósito del acoso sexual vivido, le permite beneficiarse de la regla del inciso final del artículo 168 del Código del Trabajo, aun cuando no se refiriera al despido propiamente tal, por tratarse de eventos relacionados.

Y la última consideró que la demanda se había interpuesto dentro de plazo de sesenta días a que se refiere el artículo 75 de la Ley N° 19.070, que es de días hábiles y no corridos.

Tercero: Que la sentencia de base estableció que el hecho fundante de la denuncia ocurrió el 23 de agosto de 2017, que el Sindicato efectuó diversas denuncias ante el Director Regional del Trabajo de Atacama y las Inspecciones del Trabajo de Chañaral y de Atacama, con fechas 27 de septiembre, 31 de octubre y 7 de diciembre, todas de 2017, y que la denuncia se interpuso el día 27 de diciembre de 2017. En razón de lo anterior, y pese a precisar que las actuaciones administrativas tuvieron la aptitud de suspender el término previsto en la ley para la caducidad de la acción, acogió la excepción opuesta, porque ésta se interpuso una vez vencido el plazo máximo de noventa días hábiles, contados desde la ocurrencia del hecho.

Cuarto: Que, a su vez, el fallo impugnado rechazó el recurso de nulidad que el demandante dedujo sobre la base de las causales establecidas en los artículos 477 y 478 letra b) del Código del Trabajo, que planteó en forma subsidiaria; la primera, acusando la infracción de sus artículos 486, 168 y 432 y de los artículos 253 y 257 del Código de Procedimiento Civil, y, en una segunda alegación, por la vulneración del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.



Como fundamento de la decisión se sostuvo, en lo atinente al primer motivo, que para acoger la suspensión a que se refiere el artículo 486 del Código del Trabajo, hay que estar a lo preceptuado en su artículo 168, y que de los hechos que se dieron por establecidos se desprende que el sentenciador de base acogió la excepción de caducidad con estricto apego a dichas normas, sin que se advierta infracción de ley alguna y habida consideración que el reproche se orienta a cuestionar los hechos; en cuanto al segundo, que al sostener que el sindicato ejerció la acción dentro de plazo, se controvierte la fecha de interposición de la demanda que es una cuestión de hecho, lo que deja al argumento sin asidero; y, respecto del último, porque la sentencia expresa los razonamientos que condujeron a la decisión conforme a los medios probatorios aportados, sin que el recurrente señale qué reglas de la sana crítica se vulneraron, dirigiendo sus alegaciones a cuestionar el valor probatorio que se les asignó.

Además, agregó que todas las causales se sustentan en que el plazo de caducidad para haber deducido la demanda no se habría cumplido ya que estaría suspendido por haberse interpuesto reclamo administrativo ante la Dirección Regional del Trabajo, haciendo presente al efecto que a la luz de lo dispuesto en el artículo 486 del Código del Trabajo, tanto la denuncia por tutela laboral como la por prácticas antisindicales, conforme lo estatuye el artículo 292 del mismo código, "...deberá interponerse dentro de sesenta días desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada. Este plazo se suspenderá en la forma a que se refiere el artículo 168". Disposición que establece que el plazo se suspende cuando –dentro de éste– el trabajador interpone reclamo ante la Inspección del Trabajo respectiva, es decir, del tenor literal de la norma se consigna que es la Inspección del Trabajo la entidad administrativa ante quien se debe interponer la denuncia y no otra como sucede en el caso de autos, ya que la Dirección Regional del Trabajo carece de facultades conciliadoras o fiscalizadoras que le permitirían a los trabajadores solucionar el problema en una instancia administrativa alternativa al procedimiento judicial, lo que refuerza los argumentos vertidos en el fallo. Y, a mayor abundamiento, se añade que el petitorio del libelo de impugnación se aparta de las formalidades de un recurso de derecho estricto, pues es confuso en sus planteamientos y no se pidió concretamente que se anulara el fallo y se dictara sentencia de reemplazo, sin que el juez de mérito haya fijado hechos atinentes a la vulneración de derechos, por lo que la Corte tampoco podría hacerlo.



Quinto: Que, según se observa, el recurso presenta una serie de defectos que impiden dar por cumplidos los presupuestos consignados en el artículo 483-A del Código del Trabajo, dado que se construye sobre la base de hechos distintos a los establecidos en el caso y de argumentos jurídicos que no fueron considerados para decidir de la manera que cuestiona.

Por una parte, en la materia que se propone para su unificación se alude a *“la fecha en que debe entenderse presentada la acción que interrumpe el plazo cuando el tribunal a quo ordena corregir el procedimiento”*, incorporando una cuestión fáctica que no fue asentada ni en el fallo de base ni en el que se impugna, por lo que aun de emitirse una declaración en tal sentido, ésta no podría tener efectos en la causa de que se trata; y por otra, se solicita determinar *“los requisitos que debe reunir el reclamo administrativo para suspender el plazo de caducidad de la acción de denuncia de la práctica antisindical, conforme los artículos 486 y 168 del Código del Trabajo”*, aspecto que tampoco puede incidir en la decisión, puesto que si bien sobre este punto existe una divergencia entre el fallo de mérito, que dio valor a tales actuaciones, y el de nulidad, que se los restó, lo cierto es que en cualquier caso ello resulta irrelevante, dado que se dio por acreditado que, atendidas las fechas de ocurrencia de la práctica antisindical denunciado, el 23 de agosto de 2017, y la de interposición de la demanda, el 27 de diciembre de ese año, alcanzó a transcurrir un plazo que excedió de los noventa días hábiles que el artículo 168, inciso final, del código del ramo prevé como máximo absoluto, aun cuando se haya efectuado una gestión susceptible de interrumpir el término ordinario de sesenta días hábiles.

En consecuencia, dado que el recurso se fundamenta en antecedentes fácticos y jurídicos distintos a los que sustentan la decisión que se impugna, la unificación pretendida no puede ser acogida, porque aún de serlo, no podría lograr el efecto que se pretende por carecer de los hechos que se encuentran en la base de la declaración que se persigue.

Sexto: Que, asimismo, las sentencias ofrecidas para su cotejo tampoco resultan útiles para los fines previstos en la legislación, por corresponder a situaciones fácticas y jurídicas distintas que impiden la homologación que se pretende. En efecto, no se advierte una similitud en los antecedentes que condujeron a declarar la caducidad de la acción deducida en autos, porque sea que se dé valor o no a las actuaciones administrativas previas, igualmente fue interpuesta una vez vencido el plazo de noventa días hábiles, en relación con las



incorporadas por la parte, todas las cuales se refieren a distintas discusiones, como son el valor de las referidas actuaciones previas o de la presentación de la demanda ante un tribunal incompetente.

Por consiguiente, no se cumple con uno de los requisitos esenciales para la procedencia del recurso en análisis, cual es, que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se haya arribado a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia doctrinal que deba ser resuelta y uniformada.

Séptimo: Que, de este modo, atendidos los defectos del recurso en examen, que se fundamenta en antecedentes fácticos y jurídicos ajenos a los tenidos en consideración para acoger la excepción, y que no da cuenta de una contradicción jurisprudencial que coloque a esta Corte en la obligación de dirimir cuál de las posturas doctrinales en conflicto debe prevalecer, el presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del ramo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de diecisiete de enero de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Se **previene** que el ministro señor Gómez concurre a la decisión sólo en cuanto estima que el recurso se fundamenta en hechos distintos a los asentados en autos, sin compartir sus restantes argumentos.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase.

Rol N° 21.242-2020.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora María Teresa de Jesús Letelier R., ministros suplentes señor Mario Gómez M., Eliana Quezada M., y los Abogados Integrantes señor Diego Munita L., y señora Carolina Coppo D. No firma la Ministra Suplente señora Quezada, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, dos de diciembre de dos mil veintiuno.





En Santiago, a dos de diciembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

